MÉXICO Y LA 27a. SESIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

*desarrollos y respuestas**

ELISABETH BRAUN

LA VIGÉSIMA SÉPTIMA sesión de la Asamblea General se inició en Nueva York el 19 de septiembre de 1972 con la esperanza de que la *détente* que se había empezado a desarrollar entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y entre China y los Estados Unidos tendría también sus efectos benéficos sobre las deliberaciones de la Asamblea General. La sesión finalizó el 19 de diciembre de 1972 con una sensación combinada de logro y de fracaso. El secretario general Waldheim, quien presidió la Asamblea por vez primera desde que tomó posesión de su cargo el primero de enero de 1972, caracterizó la sesión diciendo que se habían alcanzado logros mayores de los que aparecían a primera vista. Sus puntos de vista fueron corroborados por muchos diplomáticos, los cuales afirmaron que aunque la *détente* era algo visible se hacían necesarios esfuerzos ulteriores para garantizar al mundo un futuro pacífico en una atmósfera de relajamiento de las tensiones internacionales. De acuerdo al principio de rotación geográfica, el presidente de la sesión de este año fue el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Stanislaw Trepczynski.

Una de las contribuciones más importantes del grupo de "medianas potencias", al que pertenece México, a la organización mundial, es la de actuar como iniciador, mediador y conciliador en los asuntos tan a menudo irreconciliables y controvertidos de las grandes potencias. La presente Asamblea General parece haber verificado este hecho; su realización, sin embargo, fue en ocasiones considerablemente complicada debido a que muchos de estos países medianos son también miembros del grupo de estados en desarrollo del tercer mundo, por lo que pueden tener conflictos entre la lealtad ideológica debida a ese grupo y las demandas y consideraciones políticas pragmáticas tendientes a modificar las posiciones controvertidas de las grandes potencias.

El ministro de Relaciones Exteriores de México, Emilio Rabasa, mostró estar consciente de este predicamento en su discurso durante el debate general, el "debate" que precede a la discusión en la Asamblea de los puntos individuales de la agenda. Rabasa explicó que la coexistencia de los estados basada en la disuasión nuclear está cambiando hacia la cooperación activa entre las grandes potencias en Europa. A pesar de las divergencias ideológicas entre las grandes potencias, ha emer-

* Traducción del inglés de José Treviño Botti.

gido una cierta identidad o, al menos, una coincidencia de interés en lo que respecta a sus posiciones frente al tercer mundo. Al ocurrir esto, añadió, su actitud común tiende a preservar un *statu quo* que muestra no ser favorable a los países no alineados. En años recientes ha habido una disminución de la ayuda financiera de aquellas potencias a los países en desarrollo. En otras áreas, las posiciones de las grandes potencias se han venido estrechando hasta presentar casi un freno común en lo que concierne a la mayoría de los países del tercer mundo. Como ejemplo de ello, Rabasa citó las controversias sobre el derecho del mar y el desarme, en las cuales, afirman los pequeños países, las grandes potencias sólo han tenido en cuenta sus intereses.

Al establecer las prioridades en importancia e interés para México Rabasa mencionó las siguientes: 1) la reorganización estructural del Consejo de Seguridad, que permita la representación permanente de las tres regiones del tercer mundo, América Latina, África y Asia; 2) acciones inequívocas en contra del terrorismo internacional; y 3) el desarrollo de una carta de derechos y deberes económicos de los Estados. Propuesta por México, esa carta establecería que los miembros de las Naciones Unidas están obligados a llevar a cabo una política diseñada para acelerar un desarrollo económico equilibrado.

México ha sentido siempre que su preocupación permanente con respecto a las multifacéticas cuestiones del desarme lo califican para actuar, tal vez por propia designación, como un vocero de las potencias medianas y de los países del tercer mundo en las cuestiones del desarme y los problemas conexos. México ha criticado abiertamente al Comité de las Naciones Unidas para el Desarme (CCD), en Ginebra, hoy es el órgano más prominente de las Naciones Unidas para el tratamiento de las cuestiones del desarme, en particular por no satisfacer las expectativas en lo tocante a los esfuerzos para eliminar las armas químicas. En repetidas ocasiones ha sugerido México que se trasladaran nuevamente estas negociaciones a la Asamblea General, posiblemente a la Comisión sobre Desarme, la cual se halla sin un mandato directo desde que fue creado el CCD, pero que nunca ha sido disuelta. Esa Comisión es responsable ante la Asamblea General y ante el Consejo de Seguridad. La posibilidad de que el CCD pudiera ser desmantelado e incluso más bien reducida: ello requiere la aprobación de la Unión Soviética y de los Estados Unidos, los que en la actualidad conjuntamente presiden las reuniones del CCD. Ningún país se halla interesado por ahora en abandonar su posición de privilegio en el CCD. El año pasado fracasaron los esfuerzos por cambiar la copresidencia, por hacer ingresar a China en el CCD y por convencer a Francia de que tomara en él su sitio. Si bien son escasas las posibilidades de cambio de su estructura actual, la postura de México indica, sin embargo, la viva incomodidad y disgusto de los países menores con esta situación, una incomodidad que no puede ser del todo desatendida si se quiere que tengan éxito los esfuerzos simultáneos por revitalizar la organización más allá de la diplomacia declarativa y de los meros pronunciamientos.

A esta toma de conciencia se debe en parte el que México apoyara la proposición soviética de convocar una Conferencia Mundial de Desarme (CMD), en la cual todas las naciones del mundo, sean o no miembros de las Naciones Unidas, podrían presentar sus puntos de vista. Así lo hizo Alfonso García Robles en representación de México en el Primer Comité (político) de la Asamblea General. Tal conferencia, sostuvo, es la cuestión más importante que enfrenta el mundo en este momento, y la Asamblea General debería crear un comité preparatorio de alrededor de 30 miembros que investigue la sustancia y organización de la conferencia. El grupo incluiría a todos los miembros del CCD y, como un primer paso, propondría una fecha para la conferencia. México, continuó García Robles, no se opondría a una primera fecha en la primavera de 1974. La conferencia podría durar dos o tres meses; habría que considerar también si la conferencia no se debería establecer sobre términos similares a los de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la cual se reúne cada dos o tres años, por lo general en diferente sitio. México criticó a los Estados Unidos y a China, únicos países en oponerse a la CMD. El punto de vista de dichos países era que una conferencia de ese tipo no conduciría a resultados prácticos y que el peligro de un fracaso pesaría más que el deseo de promover un desarme mundial amplio. Esto trae a la memoria discusiones semejantes con ocasión, por ejemplo, de los problemas relativos a Sudáfrica o al Medio Oriente, o quizá también en torno al desarrollo económico, en relación al cual el enorme empuje de la mayoría de los países del tercer mundo conduce a la adopción de resoluciones fuertes, cuya puesta en práctica, sin embargo, deja mucho que desear o es incluso imposible, debido a la oposición de algunos estados.

La defensa que hizo México de la Conferencia Mundial de Desarme, apoyada con grados variables de entusiasmo por el resto de miembros de las Naciones Unidas, condujo a la adopción de una resolución que estableció, en efecto, un comité de 35 miembros a fin de "examinar todas las opiniones y sugerencias expresadas por los gobiernos". La resolución fue adoptada por 105 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. China indicó que no apoyaría activamente a la Conferencia, pero que querría mantener alguna conexión con el comité preparatorio, en caso de que éste quedara formalmente establecido. Existen diferentes interpretaciones sobre si la conferencia se celebrará o no: los que la favorecen piensan que sí; los que están dudosos señalan el hecho de que tal conferencia sería inútil si no participan todos los miembros del Consejo de Seguridad. Estados Unidos, un miembro permanente del Consejo, no cree en los beneficios de esa conferencia y rechazó el meollo de la proposición soviética aun cuando decidió abstenerse en la votación final.

Al tiempo que apoyaba activamente a la Unión Soviética en la cuestión de la Conferencia Mundial de Desarme, México criticó severamente a la misma Unión Soviética y a Francia por no haber aceptado el Tra-

tado de Tlatelolco como obligatorio para el hemisferio occidental. El asunto llegó al climax en esta sesión cuando China anunció en un carta dirigida al secretario general Waldheim que, “como asunto preliminar”, contraería obligaciones similares a las que estaban implícita en el Protocolo II Adicional del Tratado de Tlatelolco. La Unión Soviética ha rehusado firmar el Protocolo, arguyendo que el Tratado contiene demasiadas escapatorias, la más importante de las cuales es la falta de estipulaciones claras sobre el transporte de armas nucleares a través del continente latinoamericano.

En relación al desarme hubieron dos puntos adicionales en la agenda: 1) la no utilización de la fuerza en las relaciones internacionales y la prohibición permanente del uso de armas nucleares; y 2) el fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas con respecto al mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales.

El punto sobre la “no utilización de la fuerza”, introducido por la Unión Soviética, fue considerado por su patrocinador y sus aliados como una verdadera contribución a la seguridad internacional. Específicamente, el punto suponía que en tanto existieran armas nucleares habría la posibilidad de que una crisis o un conflicto degeneraran en una confrontación nuclear. El intento soviético por promover una declaración sobre el tema provocó reacciones diversas. Los Estados Unidos consideraron innecesario el esfuerzo, ya que constituye, en esencia, una reiteración de las medidas existentes en la Carta y aplicadas desde 1945. Esta reacción proporcionó suficientes argumentos a un buen número de países del tercer mundo, apoyados a su vez por varios estados socialistas, para acusar a los Estados Unidos y a la Gran Bretaña de practicar actividades capitalistas y neocolonialistas en diversas partes del mundo. China calificó abiertamente la acción soviética como una “traición” a los pueblos del tercer mundo; habría que impedir que el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo hicieran uso de la fuerza en el tercer mundo, pero se debería autorizar el uso de la fuerza a los países del tercer mundo en contra del imperialismo y del capitalismo. En sus implicaciones más amplias, la confrontación entre China y la Unión Soviética en torno al uso de la fuerza y a los derechos de los países no alineados, que ha llegado a ser un rasgo habitual de las deliberaciones de las Naciones Unidas, reflejó la lucha acerba entre ambos países por el liderazgo del tercer mundo. Esta lucha ha existido desde hace tiempo, pero afloró a la superficie cuando China ingresó a las Naciones Unidas en 1971, y se ha intensificado desde entonces aunque todavía no tiene claros resultados.

México criticó la campaña soviética y señaló de nuevo la actitud negativa de la Unión Soviética hacia el Tratado de Tlatelolco. Criticó, sobre todo, la provisión del proyecto presentado por la URSS en el sentido de que la renuncia a la fuerza debería convertirse en ley de la vida internacional. Ése era ya un derecho de la vida internacional contenido en la Carta de las Naciones Unidas, indicó García Robles, y por tanto era innecesario repetirlo. A pesar de los esfuerzos desplegados

or la Unión Soviética, la resolución finalmente adoptada reflejó una amplia duda sobre la utilidad y conveniencia de tal Declaración. Setenta y tres países votaron en favor de la resolución (entre ellos la mayoría de los estados de Asia y África); cuatro votaron en contra (China, Albania, África del Sur y Portugal) y cuarenta y seis naciones se abstuvieron. Aunque puede ser una casualidad, es interesante notar que China, Portugal y Sudáfrica, comúnmente "enemigos", eligieron abstenerse. Esta coincidencia, sin embargo, hizo surgir especulaciones sobre la forma en que sería interpretada por los países del tercer mundo. Para los intereses chinos resulta desafortunado que China hubiera tenido que elegir de hecho entre apoyar a la Unión Soviética y al tercer mundo, u oponérseles. En este caso, la necesidad fundamental de oponerse a la Unión Soviética y de demostrarlo públicamente fue de más peso que el apoyo al tercer mundo.

"El fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas", tema que es por propia naturaleza positivo, suscitó por eso menos crítica y comentarios. Este punto fue propuesto por Rumania y fue finalmente adoptado en la Resolución 2925 (XXVII) que sugería la necesidad de que la organización se convirtiera en "un instrumento más efectivo en la salvaguardia y fortalecimiento de la independencia y soberanía de todos los estados". La resolución fue adoptada sin votación y proporcionó un canal para expresar como se ha hecho cada año en forma diferente, que las Naciones Unidas tienen efectivamente un papel que jugar en la política internacional moderna.

México ha estado siempre preocupado por la cuestión de cómo asegurar el derecho de autodeterminación, independencia y soberanía de los pueblos, y, en consecuencia, siempre ha apoyado las resoluciones que promueven los intereses de la descolonización. Sin embargo, México ha rechazado continuamente todos los métodos de descolonización que no están claramente autorizados en la Carta de las Naciones Unidas. Por consiguiente México encuentra difícil aceptar la tesis de China presentada durante esta Asamblea General, en conexión tanto con la descolonización como con el terrorismo, de que existen guerras "justas" y guerras "injustas". Por guerra "justa" China entiende básicamente las guerras promovidas por los movimientos de liberación nacional, particularmente en África y Palestina, en contra de las fuerzas opresivas del capitalismo, del imperialismo y del neocolonialismo.

El Cuarto Comité de la Asamblea General trata tradicionalmente las cuestiones de la descolonización y de Sudáfrica; este año pidió que el Comité invite a representantes de los movimientos de liberación a participar como observadores —y no en calidad de demandantes como en ocasiones anteriores—, en las deliberaciones del Comité. Fue adoptada en este órgano una proposición con ese efecto, por 78 votos a favor y 13 en contra. Se abstuvieron 16 países. La Unión Soviética y China, por lo demás envueltos en una guerra de palabras, votaron a favor de esa representación; Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia votaron en contra; la mayoría de los países latinoamericanos se abstu-

vieron. Estos últimos, entre ellos México, argüían que podría ser ilegítimo invitar a esos representantes; que debió hacerse un estudio legal y financiero con anterioridad; que no existían precedentes para una acción de esa naturaleza; y que los demandantes habían dado en el pasado cualquier información requerida; invitar a los representantes sería meramente un acto político, y posiblemente contribuiría poco a la sustancia de las discusiones. Quienes estaban a favor de la representación acusaron a los latinoamericanos de disculpar su falta de compromiso con un tecnicismo. A este cargo respondieron los latinoamericanos diciendo que si la claridad de los principios legales de un asunto no quedaba fuera de duda no se podría derivar ningún beneficio duradero para la solución del problema mismo.

México se mantuvo igualmente firme en su actitud en el manejo de las discusiones de las Naciones Unidas sobre el apartheid. Se han expedido hasta la fecha alrededor de 200 resoluciones declarativas sobre el apartheid y sus disposiciones sustanciales rara vez han sido puestas en práctica cabalmente. México y otros países del tercer mundo se han vuelto con el tiempo más escépticos y han solicitado varias veces que la Asamblea General examine de nuevo los temas relacionados con ese problema y que concentre sus esfuerzos para lograr soluciones prácticas. Los intentos del secretario general Waldheim en favor de Namibia han contado con el apoyo entusiasta de México, aun cuando el representante especial de Waldheim no podría lograr algo más que mantener entre abiertas las puertas de la negociación con Sudáfrica, como hasta ahora. Sin embargo, la Asamblea General expidió varias resoluciones, prácticas o no, sobre el derecho a la autodeterminación de cada pueblo colonizado; que se debería abolir el apartheid; que se debería dedicar una década a combatir el racismo y la discriminación racial; que Portugal debería abandonar la administración de sus territorios en África; que debería ser eliminado el régimen racista en Rodesia del Sur; y que se debería otorgar a los namibianos (africanos del suroeste) la autodeterminación y posiblemente la independencia.

El secretario general Waldheim propuso en un principio que las Naciones Unidas discutieran los métodos para combatir la ola amenazadora del terrorismo internacional. Esta proposición vino poco después de la matanza de miembros del equipo israelí en los juegos olímpicos de Munich, perpetrada por miembros de un grupo terrorista árabe. No hay duda de que la coyuntura en que apareció la proposición de Waldheim resultó poco favorable para las discusiones ulteriores. El esfuerzo especial para evitar que los 17 estados árabes se consideraran el blanco de la iniciativa no tuvo éxito y se dejó sin discutir el aspecto más importante del asunto, a saber, las causas últimas del terrorismo. Fue en éstas sobre las que los países árabes y africanos se concentraron y posteriormente lograron que se ampliara el asunto originalmente centrado en el terrorismo internacional al de "Medidas para prevenir el terrorismo internacional que pone en peligro o quita vidas humanas inocentes o amenaza las libertades fundamentales, y estudio de las

usas subyacentes a aquellas formas de terrorismo y actos de violencia involucrados en la miseria, la frustración, el dolor y desesperación, que llevan a algunas gentes a sacrificar vidas humanas, incluyendo la tuya, en un intento por efectuar un cambio radical". Debido a la oposición de los países occidentales a estas discusiones tan prolifas, las Naciones Unidas fueron incapaces de emprender una acción efectiva contra del terrorismo internacional. Estados Unidos abrió las discusiones al proponer un bosquejo de convención en contra del terrorismo, el que, en esencia, pedía un proceso judicial o la extradición de las personas que asesinan, dañan seriamente o secuestran a civiles inocentes en un estado extranjero con el propósito de perjudicar u obtener concesiones de otro estado u organización internacional". Estados Unidos sugirió que debería haber una conferencia, tal vez en 1973, para llevar adelante la discusión de este problema. Al tiempo que Estados Unidos, América Latina, Europa occidental y otros pocos miembros de las Naciones Unidas estaban a favor de la discusión inmediata, los países árabes y africanos sostuvieron que, si bien aprobaban la iniciativa del secretario general, se opondrían a cualquier intento por poner en peligro las actividades (terroristas) de los movimientos de liberación nacional. Así pues, surgieron claramente dos elementos de la cuestión: 1) el derecho de un pueblo a utilizar cualesquiera medios disponibles para combatir las fuerzas del capitalismo, del imperialismo y del neocolonialismo; y 2) la necesidad de identificar las causas que conducen al uso del terror, las que, al menos desde el punto de vista árabe, están estrechamente vinculadas con las fuerzas del capitalismo, el imperialismo y el neocolonialismo. El tercer elemento, es decir, la búsqueda de medios para controlar o detener efectivamente el terrorismo pareció haberse extraviado en el proceso. Roberto de Rosenzweig, de México, detalló los puntos de vista de su país: las Naciones Unidas deberían hacer todos los esfuerzos posibles para combatir el terrorismo internacional, pero al mismo tiempo deberían actuar con extrema precaución para no limitar el derecho a la autodeterminación de los pueblos oprimidos.

La resolución finalmente adoptada fue propuesta por una coalición de países árabes y africanos con el apoyo activo de la Unión Soviética, y creó, a la manera tradicional de las Naciones Unidas, un comité de investigación. Este comité orientará su investigación tomando en cuenta el hecho, también expresado en esa misma resolución, de que los pueblos que se encuentran bajo regímenes coloniales y racistas o bajo otras formas de dominación extranjera tienen el derecho inalienable a la autodeterminación e independencia, y que la afirmación de este derecho podría implicar la aplicación de medios terroristas. No hubo una reconciliación en los puntos de vista: aquellos que favorecieron la resolución reconocieron que ésta se había logrado sólo debido a su superioridad numérica; en tanto que sus oponentes rechazaron la resolución aduciendo que esta mayoría numérica "no guardaba una relación necesaria con la moral, la justicia, ni aun con la política práctica".

El debate de la Asamblea General sobre el Medio Oriente dio lugar a una resolución que exigía el respeto hacia dos principios: 1) el retiro de las fuerzas israelíes de los territorios ocupados; y 2) la terminación de todas las reclamaciones o situaciones de beligerancia, y el respeto a la soberanía de cada Estado en la región. Más adelante la resolución invita a todos los Estados a evitar las acciones que incluyan a los "en el campo de la ayuda" que pudieran constituir el reconocimiento de la ocupación israelí sobre los territorios árabes. Esta última medida es nueva y fue incluida en la resolución básicamente debido al apoyo que las naciones árabes habían encontrado entre sus aliados de Asia y África. El resultado de la votación lo demuestra con claridad: 86 estados votaron a favor y 7 en contra de la resolución; 31 países se abstuvieron. Quienes votaron en contra fueron, por supuesto, Israel y 6 países latinoamericanos. México votó por la resolución con la esperanza, tal como lo sugirió el representante mexicano, de que esto contribuiría a un arreglo eventual. Hubo rumores de que la misión del embajador Jarring como representante personal del secretario general se podría dar por concluida en vista de que no había conducido a resultados apreciables; sin embargo, no se tomó ninguna acción firme. Por el contrario, hubo indicios de que los pasos intermedios, recientemente iniciados con cuidado para apresurar el arreglo eventual sobre la base de la resolución 242 del Consejo de Seguridad, serían más ampliamente explorados, el primero de los cuales era la posible reapertura del Canal de Suez.

En 1971 la Asamblea General había pedido que los miembros de las Naciones Unidas manifestaran sus puntos de vista con respecto a la revisión de la Carta de las Naciones Unidas, un asunto que ha ocupado a la Asamblea General desde 1950, pero que siempre ha sido pospuesto debido a que no era "adecuado" el "clima" para una tarea de esa envergadura. Sólo 29 países respondieron a esa invitación y las sugerencias comprendieron desde una repulsa radical (Unión Soviética) hasta una demanda abierta para ajustar la Carta a las realidades de los setenta (China). Las discusiones en el Sexto Comité (Legal) de la Asamblea General cristalizaron en dos posiciones claramente indistinguibles: 1) los estados menores del tercer mundo propugnaron por un ajuste de la Carta y una revaluación de la estructura de la organización, con la esperanza obvia de mejorar cuantitativa y cualitativamente su posición frente a los estados mayores; y 2) el deseo de los estados mayores de mantener la presente estructura tan intacta como sea posible, tal vez con ajustes circunstanciales (EU), como quedó ejemplificado por la ampliación del Consejo de Seguridad en 1963 y del Consejo Económico y Social en ese mismo año y posteriormente en 1971. La Unión Soviética rechaza cualquier intento de este tipo; sugiere que la Carta ha pasado la prueba del tiempo y que lo necesario es una revisión de los procesos y métodos para hacer que los estados miembros la cumplan "estricta e inmoviblemente"; no acepta, en cambio, una revisión más general. Francia se inclina a favor del punto de vista soviético, sobre todo

por el temor de que una revisión de la Carta restrinja las posiciones de Francia hasta el momento garantizadas por aquélla, tales como su asiento permanente en el Consejo de Seguridad y el uso del veto. China se hizo eco de la demanda de la mayoría de los países del tercer mundo señaló la urgente necesidad de una adaptación de la Carta a las condiciones de los setentas.

Abundaron las sugerencias específicas a favor de una revisión de los poderes del Consejo de Seguridad. La sugerencia de los Estados Unidos fue en parte sorprendente pero se mantuvo en la línea de su enfoque circunstancial, según la cual se deberían encontrar los medios para introducir a Japón en forma permanente en el Consejo de Seguridad, sobre todo debido al resurgimiento del poder económico y político de ese país en el Lejano Oriente. Ésa fue la única referencia específica sobre un país hecha por otro país. México sugirió que se debería establecer la representación permanente de los tres grupos del tercer mundo, América Latina, Asia y África, y que cada uno debería tener un sitio permanente en el Consejo de Seguridad. Colombia habló de la posibilidad de establecer la categoría de un "estado asociado", básicamente poniendo a disposición de las entidades políticas muy pequeñas los recursos de las Naciones Unidas, y limitando las obligaciones de aquellas con respecto a la organización. A pesar de éstas y otras sugerencias concretas hechas antes o durante las deliberaciones de la Asamblea General, el Sexto Comité no sintió que se pudiera hacer un progreso sustancial en esta sesión. En consecuencia, se empleó de nueva cuenta la maniobra tradicional de las Naciones Unidas de pedir a los miembros que presentaran sus puntos de vista sobre la "deseabilidad" de una revisión de la Carta, y que éstos se presentaran a la Asamblea General en su sesión de 1974. Esta resolución fue adoptada por el Comité legal con 63 votos a favor y 33 en contra; se abstuvieron 20 países. La Asamblea General confirmó más tarde este punto de vista con una votación de 90 a favor y 10 en contra, con 25 abstenciones. Tal y como fue adoptada, la resolución representa, en efecto, un compromiso introducido a última hora, cuando fue obvio que ninguno de los otros dos proyectos de resolución alcanzaría una aprobación mayoritaria. El primero, introducido por Filipinas en nombre del tercer mundo, sugería el establecimiento de un comité que se ocupara del asunto; el segundo, presentado por Checoslovaquia en cooperación con la Unión Soviética y otros países socialistas, pedía que el asunto fuera definitivamente retirado de la agenda de la Asamblea General. Es notorio que la resolución finalmente adoptada pide únicamente parecer sobre la deseabilidad de una revisión de la Carta; por tanto, difiere de la resolución de 1970 que había pedido puntos de vista sobre el meollo del asunto.

Los tres desarrollos más importantes durante la Asamblea General fueron los siguientes: 1) la confrontación entre Oriente (la Unión Soviética y sus aliados) y Occidente (Estados Unidos y sus aliados), especialmente sobre temas políticos, pasó a segundo plano, y se intensificó la hasta entonces batalla verbal entre la Unión Soviética y China, prin-

principalmente en torno al liderazgo de los países de tercer mundo; 2) acometida de la mayoría de estos últimos países en la Asamblea General puede impedir, rechazar y apoyar cualquier proposición introducida por el Oriente, el Occidente o por los países no alineados; y 3) en vista del empate en los temas políticos (Medio Oriente), los temas no políticos parecen adquirir una importancia creciente, con el consiguiente desplazamiento del eje del conflicto Oriente-Occidente, el cual era predominantemente político, al eje Norte-Sur, que es sobre todo económico y al que se hace referencia comúnmente como el conflicto entre los países que "tienen" y los que "no tienen". Es ya un asunto de especulación en este punto saber si en el proceso de redesplazamiento de prioridades de las preocupaciones políticas a las socioeconómicas en los años setenta aumentará o decrecerá la efectividad de las Naciones Unidas.